

## I

De acuerdo con el texto que se informa, constituye su objeto la aprobación de la prestación del servicio de asistencia al ciudadano mediante videoconferencia en los Puntos de Información Catastral gestionados por Administraciones públicas territoriales “que se prestará en los términos y condiciones que se determinen por la Dirección General del Catastro mediante instrucciones, circulares y criterios técnicos” (...), modificando a tal efecto el apartado segundo de la Resolución de la Dirección General del Catastro de 15 de enero de 2019, e introduciendo dicha modalidad —letra k— en la prestación de dicho servicio.

A dichos efectos, debe recordarse que el artículo 72.1 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, señala que *“La información catastral podrá difundirse, mediante los puntos de información catastral, por las Administraciones, corporaciones o entidades a las que se refiere el artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario cuya competencia se desarrolle en el territorio de régimen común, previa autorización de la Dirección General del Catastro que, mediante resolución, determinará las condiciones de establecimiento de aquéllos, así como el catálogo de los servicios que prestarán”*.

En el momento actual, el régimen de funcionamiento de los Puntos de Información Catastral se regula en la citada Resolución de 15 de enero de 2019, que, con carácter previo a su publicación, fue informada por esta Agencia en su informe 178/2018.

Sin embargo, según se expone por el órgano consultante, se ha evidenciado la necesidad de que “la atención al ciudadano por parte de los funcionarios de las Gerencias del Catastro pueda realizarse (también) mediante videoconferencia, poniéndose así al alcance de todos los nuevos canales de comunicación, sin que lo impidan la falta de medios y preparación tecnológica, resultando ello determinante en el medio rural, en particular, en núcleos de población alejados de las Gerencias o con dificultades de transporte y movilidad para desplazarse a éstas (...)”. “Por otra parte, se incorpora en el servicio de consulta y certificación de datos no protegidos, el del acceso al valor de referencia, como información integrante de la descripción catastral de los inmuebles, ya sea para su consulta o para la obtención de certificados. Se amplían, por tanto, las posibilidades de acceso de los ciudadanos a esta información catastral en los Puntos de Información Catastral”.

## II

El texto sometido a informe debe analizarse atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales — LOPDGDD—.

Esta Agencia ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones sobre los Puntos de Información Catastral, entre otros, en los informes 568/2004, 230/2008 y 178/2018, analizando su incidencia en materia de protección de datos.

Específicamente en relación con la Resolución de la Dirección General del Catastro de cuya modificación se trata, según se expuso en el último de los citados informes, y ahora se reitera:

### “III

*Por otro lado, y partiendo de lo previsto en el artículo 73 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, destaca la Resolución proyectada que la misma garantiza la plena observancia de las normas de protección de datos de carácter personal, estableciendo la obligación de las entidades que presten servicios a través de un punto de información catastral de disponer de los controles oportunos que garanticen el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal y de facilitar en todo momento a la Dirección General del Catastro de toda la información que sea recabada por ésta a fin de comprobar el cumplimiento de las normas de protección de datos.*

*Asimismo, regula el Apartado Quinto.2 el acceso a datos protegidos por el titular registral, que debe entenderse como una modalidad de ejercicio del derecho de acceso regulado por el artículo 15 del RGPD y no como una forma de ejercicio del derecho de acceso a archivos y registros regulado en el artículo 105.b) de la Constitución y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas lo que, como ya se indicaba en el informe 230/2008.*

*En cuanto al acceso a datos protegidos de terceros, quedará limitado, tal y como señala el Apartado Quinto.3 a los supuestos de interés legítimo y directo establecidos en el artículo 53.1.c), d) y e) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, lo que resulta conforme con lo previsto en el artículo 6.1. f) del RGPD.*

*Por último, el Apartado Octavo regula la formación del usuario PIC y la elaboración de programas específicos de formación del usuario PIC, en los que deberán incluirse los conocimientos necesarios en materia de protección de datos de carácter personal.”*

Pues bien, en primer lugar, debe señalarse que el acceso al dato catastral relativo al “valor de referencia”, introducido en la nueva dicción de la letra a) del artículo Segundo de la Resolución que ahora se informa, no supone

especialidad alguna respecto del régimen general establecido —para los datos no protegidos— en el Título VI del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, cuando dispone que:

*“Artículo 52. Condiciones generales del acceso.*

*1. Todos podrán acceder a la información de los inmuebles de su titularidad y a la información de datos no protegidos contenidos en el Catastro Inmobiliario.”*

Nótese que el régimen jurídico del “valor de referencia” del catastro, se recoge en la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, cuyo artículo decimocuarto modifica el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, a saber:

*“Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 3, que queda redactado de la siguiente forma: «1. La descripción catastral de los bienes inmuebles comprenderá sus características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encontrarán la localización y la referencia catastral, la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las construcciones, la representación gráfica, el valor de referencia, el valor catastral y el titular catastral, con su número de identificación fiscal o, en su caso, número de identidad de extranjero. Cuando los inmuebles estén coordinados con el Registro de la Propiedad se incorporará dicha circunstancia junto con su código registral.»*

A su vez, el artículo 50.1 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario dispone que la difusión de la información catastral se regirá por lo dispuesto en el citado Título VI de dicha norma. Y, por su parte, su artículo 51, bajo el epígrafe “Datos protegidos”, establece el régimen especial aplicable a estos, entre los que no se encuentra el “valor de referencia”.

En resumen, las posibilidades de acceso de los ciudadanos a esta información en los Puntos de Información Catastral, no supone especialidad alguna respecto del tipo de información que hasta el momento viene ofreciéndose por dicho servicio a través del resto de modalidades por cuanto, según se señala, dicho acceso se refiere a datos no protegidos, que son de libre acceso. De tal suerte, el conocimiento de dicho dato (valor de referencia) incide positivamente tanto en la seguridad jurídica de las transacciones inmobiliarias, como en las potestades de prevención del fraude fiscal, gestión, investigación y sanción —entre otras— de la Administración Tributaria, estando refrendado su acceso por normas con rango de ley formal, que no infringen lo dispuesto en la normativa de protección de datos.

### III

En cuanto a la incorporación al servicio de la modalidad de atención mediante videoconferencia, la modificación que se informa afecta a las letras j)

y k) del artículo segundo de la Resolución de 15 de enero de 2019, cuya nueva redacción se transcribe:

*“j) Servicio de concertación de cita previa para ser atendido en las Gerencias y, en particular, para ser atendido mediante videoconferencia.*

*k) Servicio de asistencia en la atención al ciudadano mediante videoconferencia en los Puntos de Información Catastral gestionados por Administraciones públicas territoriales que se prestará en las condiciones y términos que se determinen por la Dirección General del Catastro mediante instrucciones, circulares y criterios técnicos. Este servicio deberá ser autorizado conjuntamente con el de la letra j).”*

Con carácter general, se ha de tener en cuenta que el artículo 4.1 del RGPD define datos personales como *“toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”*.

A su vez, de acuerdo con el contenido de la *“Definición”* del punto 2 del propio artículo 4 del RGPD, para que exista tratamiento de datos de carácter personal, se requiere la realización de *“cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción”*. Por su parte, la definición de *“fichero”* se contiene en el apartado 6 del artículo 4, que refiere a *“todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica”*.

En atención a dichas definiciones, y a la vista de la modificación de la norma que se informa, resulta claro que, por parte de los órganos competentes —Gerencias del Catastro y Puntos de Información Catastral gestionados por las Administraciones públicas habilitadas por la Dirección General del Catastro—, tanto (i) para concertación de citas previas para ser atendido a través de videoconferencia, como (ii) para la prestación del servicio de atención al ciudadano mediante dicha modalidad, se realizarán tratamientos de datos de carácter personal en el sentido previsto por la normativa de protección de datos, constituyendo el objeto último de dichos tratamientos los fines que, en

cada caso, define la normativa aplicable, y, especialmente, el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

En el supuesto objeto de informe, la base jurídica que justificaría el tratamiento de la información con datos de carácter personal se incardina en el apartado e) del artículo 6.1 RGPD, toda vez que las potestades públicas desplegadas por el órgano consultante derivan de lo dispuesto en el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (especialmente en su artículo 72.1). Así, la Exposición de Motivos del citado Real Decreto explica que los puntos de información catastral son el instrumento para la difusión por otras Administraciones, Corporaciones o Entidades de la que esté disponible en la base de datos nacional del Catastro

En relación con la utilización de videoconferencias para la atención al ciudadano por parte de los funcionarios de las Gerencias del Catastro, debe señalarse que ya el *Considerando 59* del RGPD dispone que *“Deben arbitrase fórmulas para facilitar al interesado el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Reglamento, incluidos los mecanismos para solicitar y, en su caso, obtener de forma gratuita, en particular, el acceso a los datos personales y su rectificación o supresión, así como el ejercicio del derecho de oposición. El responsable del tratamiento también debe proporcionar medios para que las solicitudes se presenten por medios electrónicos, en particular cuando los datos personales se tratan por medios electrónicos. El responsable del tratamiento debe estar obligado a responder a las solicitudes del interesado sin dilación indebida y a más tardar en el plazo de un mes, y a explicar sus motivos en caso de que no fuera a atenderlas”,* y el *Considerando 64* que *“El responsable del tratamiento debe utilizar todas las medidas razonables para verificar la identidad de los interesados que soliciten acceso, en particular en el contexto de los servicios en línea y los identificadores en línea. El responsable no debe conservar datos personales con el único propósito de poder responder a posibles solicitudes”*.

Partiendo de lo anterior, esta Agencia sugiere que, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de los afectados por el uso de la modalidad de videoconferencia en relación con los servicios de asistencia al ciudadano en los Puntos de Información Catastral, y dado que dicha forma de gestión administrativa del servicio implicará necesariamente el tratamiento de datos personales, se incluya un artículo específico referido al tratamiento de los datos de carácter personal que garantice la accesibilidad tanto en el cumplimiento del deber de informar respecto del tratamiento de los datos de carácter personal como respecto del ejercicio de sus derechos por las personas afectadas, proponiéndose la siguiente redacción:

### **Protección de datos de carácter personal**

**“Se garantiza la protección de datos de carácter personal y, en particular, la seguridad y confidencialidad de los datos que sean objeto de tratamiento por el responsable del Punto de Información Catastral, en los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.**

**En todo caso, las personas atendidas mediante videoconferencia en los Puntos de Información Catastral podrán acceder a la información sobre el tratamiento de sus datos personales y ejercer los derechos que les reconoce la normativa sobre protección de datos de carácter personal.”**

#### **IV**

Por otro lado, debe hacerse especial referencia a las medidas de seguridad que deben adoptarse para salvaguardar el derecho a la protección de datos, al no existir un elenco cerrado de las mismas establecido por la legislación de protección de datos.

En este punto, hay que tener en cuenta que el RGPD ha supuesto un cambio de paradigma al abordar la regulación del derecho a la protección de datos personales, que pasa a fundamentarse en el principio de «accountability» o «responsabilidad proactiva» tal y como ha señalado reiteradamente la AEPD (Informe 17/2019, entre otros muchos) y se recoge en la Exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD): *“la mayor novedad que presenta el Reglamento (UE) 2016/679 es la evolución de un modelo basado, fundamentalmente, en el control del cumplimiento a otro que descansa en el principio de responsabilidad activa, lo que exige una previa valoración por el responsable o por el encargado del tratamiento del riesgo que pudiera generar el tratamiento de los datos de carácter personal para, a partir de dicha valoración, adoptar las medidas que procedan”*. Dentro de este nuevo sistema, es el responsable del tratamiento el que, a través de los instrumentos regulados en el propio RGPD como el registro de actividades del tratamiento, el análisis de riesgos o la evaluación de impacto en la protección de datos personales, debe garantizar la protección de dicho derecho mediante el cumplimiento de todos los principios recogidos en el artículo 5.1 del RGPD, documentando adecuadamente todas las decisiones que adopte al objeto de poder demostrarlo.



Así, el artículo 24.1 del Reglamento General de Protección de Datos dispone que *“Teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente Reglamento. Dichas medidas se revisarán y actualizarán cuando sea necesario”*.

Esta previsión se completa con lo señalado en el considerando 75 del Reglamento, según el cual *“Los riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas, de gravedad y probabilidad variables, pueden deberse al tratamiento de datos que pudieran provocar daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales, en particular en los casos en los que el tratamiento pueda dar lugar a problemas de discriminación, usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada de la seudonimización o cualquier otro perjuicio económico o social significativo; en los casos en los que se prive a los interesados de sus derechos y libertades o se les impida ejercer el control sobre sus datos personales; en los casos en los que los datos personales tratados revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, la religión o creencias filosóficas, la militancia en sindicatos y el tratamiento de datos genéticos, datos relativos a la salud o datos sobre la vida sexual, o las condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas; en los casos en los que se evalúen aspectos personales, en particular el análisis o la predicción de aspectos referidos al rendimiento en el trabajo, situación económica, salud, preferencias o intereses personales, fiabilidad o comportamiento, situación o movimientos, con el fin de crear o utilizar perfiles personales; en los casos en los que se traten datos personales de personas vulnerables, en particular niños; o en los casos en los que el tratamiento implique una gran cantidad de datos personales y afecte a un gran número de interesados”*.

A su vez, en relación con la seguridad de los datos personales, el artículo 32.1 establece que *“Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo”*.

De lo que acaba de indicarse se desprenden que la evolución del modelo desde la lista de cumplimiento de medidas, anterior al RGPD, a la responsabilidad proactiva previsto en este impone la necesidad de realizar *un análisis de riesgos* en materia de protección de datos y, en su caso una *evaluación de impacto* en la misma, sin que sea suficiente una mera remisión a

las normas de protección de datos, habida cuenta que éstas ya no establecen un modelo tasado de cumplimiento.

Particularmente relevante resulta la adopción de dichas medidas tendentes a garantizar la protección del derecho fundamental a la protección de datos personales, incluida su seguridad, en las transmisiones de *datos personales por videoconferencia* o por cualquier otro medio.

A dichos efectos, se propone la mención expresa de las medidas de cumplimiento normativo necesarias, por lo que el órgano consultante podría incorporar un nuevo párrafo que señalase —de manera explícita— **que en el tratamiento de los datos de carácter personal se implantarán las medidas de seguridad necesarias, con estricta observancia de las previstas en el RGPD y a la LOPDGDD. Los sistemas de información que traten datos personales deberán garantizar la aplicación de las medidas técnicas y organizativas que resulten del correspondiente análisis de riesgos conforme al artículo 24 del Reglamento General de Protección de Datos y, en los supuestos de su artículo 35, una evaluación de impacto en la protección de datos por el responsable o el encargado del tratamiento, asesorado por el delegado de protección de datos, en los términos previstos en el artículo 3 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. Dichas medidas serán revisadas y actualizadas cuando sea necesario.**

Finalmente, además de cumplir los requisitos anteriores, deberán adoptarse todas las medidas oportunas para garantizar los principios que se recogen en el artículo 5 del RGPD:

*“1. Los datos personales serán:*

*a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»);*

*b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);*

*c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);*

*d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);*

*e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);*

*f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra*



*su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).*

*2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).*

A estos efectos, **en la Resolución que se informa podría incluirse un apartado concreto en el que se informase al afectado, de manera clara y comprensible, de los términos y condiciones del proceso de identificación remota por video, así como de las recomendaciones de seguridad aplicables, en los términos señalados en el artículo 13 del RGPD, pudiendo facilitarse dicha información “por capas”, al amparo del artículo 11 de la LOPDGDD.**

Asimismo, deberá atenderse especialmente a los **principios de limitación de la finalidad y minimización de datos** como manifestaciones del principio de proporcionalidad, analizando si los datos a tratar son estrictamente los necesarios para la finalidad perseguida.